

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	i) Jorge Mario Montaña Zuleta ii) María Edilma Zuleta Duque iii) Jorge Iván Montaña Velásquez iv) Vanesa Montaña Velásquez v) Julián Stiven Montaña Londoño
DEMANDADAS	i) Nelson Velásquez Gómez ii) Ricardo Buitrago Córdoba
RADICADO UNICO NACIONAL	05088-31-05-001-2018 00256 01
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo conexo-incidente regulación honorarios
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	290 de 2022

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la parte ejecutante contra la decisión del 21 de junio de 2022, que rechaza incidente de regulación de honorarios.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

En auto del 21 de junio de 2022 se rechazó por improcedente el incidente de regulación de honorarios propuesto por el apoderado de la parte ejecutante, ello conforme al inciso 2° del artículo 76 del CGP, porque al no configurarse el presupuesto de la revocatoria del poder de manera expresa o tácita el apoderado no está legitimado para solicitar la regulación de honorarios, sin perjuicio de que pueda acudir al juez laboral para cobro en proceso diferente.

RECURSO DE APELACIÓN

Fue presentado por el incidentista indicando que el *a quo* incurrió en error de apreciación de las pruebas documentales y hechos narrados en el incidente, y que de su análisis integral se puede constatar:

“1. Que desde el 16 de julio de 2021, Mis Poderdantes tenían la intención de prescindir de mis servicios.

2. Que como Apoderado de los demandantes, me pronuncié rechazando la terminación anormal del proceso el 19 de julio de 2021 con un memorial que radique en el Despacho, a pesar de no conocer las causas y circunstancias por las cuales se proponía la terminación del proceso y que se lo manifestó a mis poderdantes y al Despacho, que tal actuación de manera tácita estaba configurando una revocatoria de mi Mandato con representación, mandato que estaba contenido en los poderes y en el contrato de prestación de servicios puestos en dos incidentes de regulación de honorarios presentados.

3. Que posteriormente, el 27 de agosto de 2021, a pesar de la oposición presentada por este Apoderado, en donde estaba sustentada la oposición, en que no se tenía clara la forma de arreglo y en especial el monto a pagar por el Demandado, uno de mis Poderdantes solicitó cita para la terminación del proceso, configurándose el derecho de postulación directa y personal por parte del señor JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA y el resto de la familia.

4. Que el 26 de octubre de 2021 y luego el 26 de abril de 2022, TODOS mis Poderdantes ahora Incidentados ratificaron mediante escritos presentados al Despacho, (uno de los documentos autenticado en notaria) que prescindían de mis servicios, que actuaron toda la familia en causa propia en su propio

nombre y representación, que ratificaron y configuraron el derecho de postulación directa y personal en el proceso por parte de toda la familia y que el Despacho reconoció dicha calidad y actuación y postulación directa y personal cuando emitió el fallo el 9 de mayo de 2022, al dictar el auto 073 notificado por estados del 10 de mayo de 2022, que accedió a la terminación del proceso, desconociendo las facultades y el mandato con representación que tenía el Apoderado.

5. Que los mismos postulantes directos que actuaron en causa propia, en ambos escritos presentados, solicitaron “fijar honorarios correspondientes a nuestro abogado apoderado, sobre el valor de la transacción acordado, por terminación anormal y desistimiento del proceso, toda vez que el acuerdo inicial fue del 30% para acompañar el proceso hasta el final”. Sin embargo, el Despacho no se pronunció en ninguno de sus fallos y decisiones sobre dicha petición de regular o fijar los honorarios, petición que fue firmada por todos los Demandantes del proceso y con la anuencia del mismo Demandado. No se explica porque el Despacho, teniendo la petición de las partes activa y pasiva y del apoderado afectado, por el no pago de sus honorarios, no se pronunció en el mismo fallo respecto de fijar los honorarios o regular los honorarios como se pidió oportunamente. Aquí se cuestiona lo siguiente: Desde el mismo momento en que se conoció sobre la intención de las partes de dar por terminado el proceso sin la participación del Abogado, se presentó al Despacho, el 26 de noviembre de 2021, un memorial contentivo de un incidente de regulación de honorarios, casi con todo el mismo contenido del presentado y resuelto desfavorablemente, pero que el Juzgado no estudió, no resolvió, no se pronunció en ese momento procesal como lo exige la norma, oportunidad que aprovecharon los Demandantes para continuar con la “trama” de seguir el proceso con su propia representación y dar por terminado el proceso. De haber resuelto o haberse pronunciado el Despacho respecto de ese primer memorial o incidente de regulación de honorarios (del 26 de noviembre de 2021), hubiéramos emprendido las acciones a que hubiera lugar para evitar la “defraudación” que a todas luces se vislumbraba con el actuar de las partes.

6. Auscultando el contenido de los memoriales del 26 de octubre de 2021 y luego el 26 de abril de 2022, se puede inferir sin lugar a dudas que Mis Poderdantes dieron por terminado el proceso ejecutivo laboral conexo, que dieron por terminado mi Representación en el proceso, y que revocaban de manera tácita cualquier facultad de este apoderado para intervenir en el proceso, revocándome el Poder de manera tácita, pero que solo se configuró tal revocatoria cuando el Despacho dictó el auto 073 notificado por estados del 10 de mayo de 2022, que accedió a la terminación del proceso, porque los mandantes le pusieron fin al proceso.

7. Como estipula la norma: “Dicha revocación del mandato puede ser tacita o expresa”; la revocación tacita se da cuando, por ejemplo, Pedro celebros un contrato de mandato con Juan para que le traditara un inmueble a Teresa, su compradora, y Pedro el día señalado para la firma del contrato se adelanta a la notaría y llama a Teresa para que ambos firmen el contrato, prescindiendo de los servicios o facultades que le había otorgado a Juan. Caso similar ocurrió con Mis Poderdantes que me revocaron el poder de manera indirecta.

8. El Despacho, de manera apresurada, acepta la terminación del proceso, ordena la cancelación de las medidas cautelares y ordena la entrega de los títulos consignados a órdenes del Despacho, rompiendo con el equilibrio y garantía de equidad y justicia para todas las partes incluida el Apoderado, porque no puede permitir que por actuaciones de mala fe de Mis Poderdantes, se derrumbe el trabajo que los profesionales del derecho hacemos en los Despachos Judiciales, dejando en este caso, una de las partes afectadas con dicha decisión. Ordenar la entrega de los títulos judiciales a los Demandantes y no permitir el embargo de por lo menos esas cifras de dinero, no solo permite que el proceso termine, sino además que deja al abogado sin ninguna garantía para que se le paguen sus honorarios y el trabajo de más de 9 años, porque queda claro que no habrá otra garantía para que se me reconozcan mis derechos por el trabajo que se ejecutó profesionalmente.

9. Consideramos con todo respeto que el Despacho al no resolver en tiempo el memorial con solicitud de oposición al desistimiento del 19 de julio de 2021, en donde se presentaba oposición a contrato de desistimiento, luego al no pronunciarse sobre el primer incidente de regulación de honorarios del 26 de noviembre de 2021, los cuales, ambos se presentaron mucho tiempo antes del fallo que dio por terminado el proceso el proceso en mayo 9 de 2022 y del segundo incidente del 26 de mayo de 2022 que estamos apelando y al no considerar todas las pruebas aportadas sobre la defraudación que pretendían los Poderdantes, incurrió en vía de hecho judicial, porque implicó una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley que condujo a la terminado el proceso, que desconoció la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo; También se incurrió en una vía de hecho, porque se hizo valer una pretensión o un derecho por propia mano a personas que querían ocultar las cifras de una negociación sin pagar lo contratado al abogado y porque en el ejercicio del derecho que tiene los abogados de recibir sus honorarios, se obró con ausencia total del procedimiento legal y aplicando o pretendiendo aplicar otro procedimiento distinto al señalado y pedido por las partes, para que con el tiempo se diluya la obligación de pagar o no se tenga oportunidad de cobrar a los deudores.”

Alude al contrato de mandato, al contrato firmado entre las partes, a la terminación y revocatoria del contrato de mandato, a la extinción del mandato en el Código de Comercio, a la buena fe en la celebración de los contratos, a la jurisprudencia respecto de la revocatoria del poder.

Solicita se revoque la decisión y se ordene la admisión del incidente para que se dicte sentencia frente al pago de los honorarios debidos por los demandados Jorge Mario Montaña Zuleta, María Edilma Zuleta Duque, Jorge Iván Montaña Velásquez, Vanessa Montaña Velásquez y Julián Stiven Montaña Londoño, con motivo del proceso ejecutivo laboral conexo que se

terminó en el Despacho, al estar demostrado que se presentó una revocatoria tácita e indirecta del poder en el proceso referido, con una terminación del proceso pedida de mala fe y aceptadas de manera irregular.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El recurrente presentó alegatos reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si se configuran los presupuestos para el trámite del incidente de regulación de honorarios presentado por el Dr. José Rene Velásquez Molina, o si por el contrario, le asiste razón al *a quo* al rechazarlo por improcedente.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

En lo que al incidente de regulación de honorarios se refiere, es preciso acudir a lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso, el cual es del siguiente tenor:

ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.

El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral.

Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido.

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.

La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda. (Subraya de la Sala para resaltar).

Al rechazar el incidente indicó el *a quo*:

De conformidad, con la norma expuesta, estará legitimado para solicitar la regulación de honorarios por la vía incidental, el apoderado judicial a quien le ha sido revocado el poder, caso en el cual deberá elevar la solicitud de regulación de honorarios dentro del término señalado por la norma, esto es, 30 días siguientes a la notificación del auto que acepta la revocatoria.

En este orden de ideas, evidencia el despacho que según folios 11 a 15 del proceso ordinario, los señores Jorge Mario Montaña Zuleta, María Edilma Zuleta Duque, Jorge Iván Montaña Velásquez, Vanesa Montaña Velásquez, Julián Stiven Montaña Londoño, confirieron poder al abogado JOSE RENE VELASQUEZ para demandar en proceso ordinario, el cual nunca fue revocado. Luego a folios 7 del proceso ejecutivo, el señor JORGE MARIO MONTAÑEZ ZULETA, confirió poder especial al abogado JOSE RENE VELASQUEZ MOLINA para instaurar demanda Ejecutiva Laboral en CONEXO, en contra de NELSON VELASQUEZ GOMEZ Y RICARDO BUITRAGO CORDOBA, quien llevó el proceso hasta su terminación por pago.

Al estudiar el proceso ejecutivo, se evidencia que el demandante señor JORGE MARIO MONTAÑEZ ZULETA, presentó solicitud de revocatoria al poder el 31 de octubre de 2018, como obra a folios 96, pero el despacho mediante auto del seis de noviembre del dos mil dieciocho, le solicitó aportar el paz y salvo a efecto de aceptar la revocatoria al poder, situación que nunca ocurrió por lo tanto, el Juzgado nunca aceptó la revocatoria al poder y el apoderado continuó actuando como abogado de la parte ejecutante.



Ahora bien, se observa que los demandantes solicitaron la terminación por pago de la obligación, a lo cual el despacho mediante auto del 9 de mayo de 2022, accedió a lo solicitado, ordenando su archivo definitivo, y levantando las medidas cautelares.


Así las cosas, se tiene que en ningún momento se aceptó revocatoria al poder, ni la parte ejecutante confirió poder a un nuevo apoderado, tal como lo ordena el artículo 76 del Código General del Proceso, y al no configurarse el presupuesto de la revocatoria del poder de manera expresa o táctica, el apoderado no está legitimado para solicitar la regulación de honorarios, esto sin perjuicio de que pueda acudir ante el juez laboral para su cobro en proceso diferente.

Por lo tanto, hay lugar a rechazar de plano dicha solicitud. En consecuencia, el despacho,


Revisado el expediente digital del proceso ejecutivo, se advierte lo siguiente:

	Sentencia de primera instancia del proceso ordinario
--	--

	<p>FALLA</p> <p>PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante Jorge Mario Montaña Zuleta identificado con la cédula de ciudadanía 3.348.890, el señor Nelson Augusto Velásquez Gómez identificado con la cedula de ciudadanía 15.505.050 y el señor Ricardo Buitrago Córdoba identificado con la cédula de ciudadanía 71.590.282, existió una relación laboral.</p> <p>SEGUNDO. DECLARAR que el accidente de trabajo ocurrió por culpa del empleador.</p> <p>TERCERO. CONDENAR a la indemnización plena de perjuicios.</p> <p>Lucro consolidado: \$24.304.652</p> <p>Lucro Futuro: \$89.243.446</p> <p>Total lucro: \$113.548.098</p> <p>Perjuicios morales: para el demandante, el equivalente a 20 SMMLV, y para cada uno de los hijos del actor y para su madre, el</p> <div><div>12</div><div><div>REPÚBLICA DE COLOMBIA</div><div></div><div>Justicia Laboral Del Circuito De Bello - Antioquia</div></div><div>equivalente a 10 SMMLV</div><div><p>CUARTO. ABSOLVER a la sociedad TODO HERRAJES S.A.S. identificado con NIT. 830503243-3 y al codemandado Nelson Buitrago Muñoz identificado con la cédula de ciudadanía número 98.766.104, de todas las pretensiones de la demanda.</p><p>QUINTO. EXCEPCIONES. De la argumentación anterior se entiende que. las excepciones presentadas dentro de este proceso no prosperan.</p><p>QUINTO. CONDENAR en costas a la parte demandada Nelson Augusto Velásquez Gómez y Ricardo Buitrago Córdoba, por lo razonado en la parte motiva. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$28.000.000.</p><div></div></div></div>
7/12/2016	Sentencia de segunda instancia del proceso ordinario

	<div><div>REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN</div><div></div><div>SALA LABORAL</div><div><p>En mérito de lo expuesto, la SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión que se revisa en apelación. Pero MODIFICA el valor de los perjuicios morales fijados a favor del accionante, así:</p><p>Se CONDENA a los señores NELSON AUGUSTO VELÁSQUEZ GÓMEZ y RICARDO ANTONIO BUITRAGO CÓRDOBA a reconocer y pagar al señor JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.C.TE. (\$50.000.000,00) por perjuicios morales.</p><p>Sin costas en esta instancia.</p></div><div><p>Los Magistrados,</p><div><div>MARTHA CECILIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ</div><div>CARLOS JORGE RUIZ BOTERO</div></div></div></div>
6/02/2018	Poder especial para presentar demanda ejecutiva laboral, otorgado por Jorge Mario Montaña Zuleta al Dr. José Rene Velásquez Molina (incidentista)
16/04/2018	<p>Demanda ejecutiva promovida por José Rene Velásquez Molina en calidad de apoderado de Jorge Mario Montaña, cuyas pretensiones son:</p> <div><div>PRETENSIONES</div><p>Fundado en los hechos expuestos y en las disposiciones legales que adelante Citaré, en nombre de Mi Poderdante JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA, solicito respetuosamente librar mandamiento ejecutivo a favor de mi Poderdante y en contra de NELSON AUGUSTO VELASQUEZ GOMEZ, mayor de edad identificado con cédula No. 15.505.050 y RICARDO ANTONIO BUITRAGO CORDOBA, mayor de edad identificado con cédula No. 71.590.282, por las siguientes sumas:</p><p>PRIMERA: La suma de \$217.322.098.00 (Doscientos diecisiete millones trescientos veintidós mil noventa y ocho pesos), representados en los siguientes conceptos: Lucro cesante total \$113.548.098, Perjuicios morales totales \$75.774.000 y agencias en derecho \$28.000.000 pesos.</p><p>SEGUNDA: Los intereses moratorios sobre la anterior suma, a la tasa legal de mora autorizada desde el día en que se hizo exigible la sentencia laboral y hasta que se satisfagan la misma.</p><p>TERCERA: Condenar a los Demandados al pago de las costas y gastos del presente ejecutivo que se hizo necesario iniciar y perfeccionar para el cumplimiento de la sentencia laboral ordinaria en firme.</p><p>CUARTA: Decretar las medidas cautelares necesarias para el logro del pago efectivo que pediremos en la medida en que se identifiquen los bienes y en las cuentas de bancarias que se identifiquen y demás que se pidan en el proceso.</p></div>
23/04/2018	Auto libra mandamiento de pago en favor de todos los demandantes del proceso ordinario

	<div><div>RESUELVE:</div><div><div>PRIMERO.</div><div>Librar Mandamiento de Pago por la vía Ejecutiva Laboral a favor de los ejecutantes JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA, cc 3348890, MARIA EDILMA ZULETA DUQUE, cc 21733306, JORGE IVAN MONTAÑO VELASQUEZ, cc 1128384944, VANESSA MONTAÑO VELASQUEZ, cc 1128396595, JULIAN STIVEN</div></div><div><div>Artículo 108 del Código Procesal Laboral</div></div></div> <div><div>4</div><div><div>MONTAÑO LONDOÑO, cc 1128387907, y en contra de NELSON AUGUSTO VELASQUEZ GOMEZ, con cédula de ciudadanía 15.505.050 y RICARDO BUITRAGO CORDOBA, con cédula de ciudadanía Nro 71.590.282, por las condenas en las sentencias de primera y segunda instancia, así:</div><div><div>A. Por Indemnización plena de perjuicios:</div><div><div>Lucro Consolidado:</div><div>La suma de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$24.204.652).</div><div>Por Lucro futuro:</div><div>La suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERANTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS. (\$89.243.446).</div></div><div><div>B. Perjuicios Morales:</div><div><div>A favor del demandante: CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000).</div><div>A Favor de los hijos del actor y su madre: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS. (\$5.895.000).</div></div><div><div>C. Por agencias en derecho, la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$28.000.000).</div><div>No se accede a los intereses moratorios, por cuanto en las sentencias de primera y segunda instancia no hubo condena sobre los mismos.</div></div></div></div></div></div>
31/10/2018	<div><div>Dentro del trámite del proceso ejecutivo, el ejecutante Jorge Mario Montaña Zuleta, solicita se revoque poder al Dr. José Rene Velásquez Molina y que no se le entreguen dineros.</div><div><div>31 OCT 2018</div><div>SOLICITUD</div><div><div>Yo Jorge Mario Montaña Zuleta identificado con cedula de ciudadanía C.C 3.348.890 De Medellín, solicito muy amablemente al juzgado laboral del circuito de Bello, me sea revocado el poder al Señor abogado José Rene Velásquez Molina identificado con cedula de ciudadanía C.C 3.367.460 con tarjeta profesional N° 147724. Donde solicito a este juzgado que no le entreguen ningún tipo de dinero bajo ningún concepto a este señor, cualquier tipo de desembolsos o haberes hacerlo directamente a mi persona, Jorge Mario Montaña Zuleta.</div><div><div>Atentamente,</div><div><div>Jorge Mario Montaña Zuleta</div><div>C.C 3.348.890 De Medellín</div></div></div></div></div></div>

6/11/2018	<p>Mediante auto el juzgado requiere al ejecutante Jorge Mario Montaño Zuleta para que aporte paz y salvo, a efectos de aceptar la revocatoria.</p> <p style="text-align: center;">JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO Bello, Noviembre seis del dos mil dieciocho</p> <p>De conformidad con el art. 76 del código general del proceso en concordancia con el art. 36 num 2° de la ley 1123 de 2007, el demandante señor JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA, deberá aportar el paz y salvo del abogado JOSÉ RENÉ VELASQUEZ MOLINA, a efecto de aceptar la revocatoria.</p> <p style="text-align: center;">NOTIFIQUESE</p> <p>EL JUEZ</p> <p style="text-align: center;"> JOHN JAIRÓ BEDOYA LOPERA</p> <p>Be</p> <p>CERTIFICO QUE: Se notificó el auto anterior por Estados Número 175 Hoy 7/ del mes de <u>Noviembre</u>/ del año 2018 Siendo las ocho de la mañana.</p>
20/11/2018	Incidente regulación honorarios presentado por el Dr. José Rene Velásquez Molina.
4/11/2018	<p>Auto rechaza incidente anterior al no haberse aceptado la revocatoria al poder. Para ello indicó el <i>a quo</i>:</p> <p>De conformidad, con la norma expuesta, estará legitimado para solicitar la regulación de honorarios por la vía incidental, el apoderado judicial a quien le ha sido revocado el poder, caso en el cual deberá elevar la solicitud de regulación de honorarios dentro del término señalado por la norma, esto es, 30 días siguientes a la notificación del auto que acepta la revocatoria.</p> <p>En este orden de ideas, evidencia el despacho que según folio 11 del expediente, el señor JORGE MARIO MONTAÑEZ ZULETA, confirió poder especial al abogado JOSE RENE VELASQUEZ MOLINA para instaurar demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de NELSON VELASQUEZ GOMEZ Y RICARDO BUITRAGO CORDOBA, quien llevó el proceso ordinario hasta su culminación. Luego el apoderado presentó la demanda ejecutiva, y luego el demandante señor JORGE MARIO MONTAÑEZ ZULETA, presentó solicitud de revocatoria al poder, como obra a folios 400, pero el despacho mediante auto del seis de noviembre del presente año, le solicitó aportar el paz y salvo a efecto de aceptar la revocatoria al poder.</p> <p>Así las cosas, se tiene que al no aceptarse la revocatoria al poder, como lo ordena el artículo 76 del Código General del Proceso, no es procedente que el apoderado presente incidente de regulación de honorarios, por lo que hay lugar a rechazar de plano dicha solicitud.</p>
16/07/2021	El ejecutante Jorge Mario Montaña Zuleta y el demandado Nelson Augusto Velásquez Gómez, solicitan terminación anormal del proceso por desistimiento y acuerdo entre las partes
22/07/2021	Pronunciamiento del Dr. José Rene Velásquez Molina, sobre contrato que firmaron las partes para desistir de la demanda, manifestando desacuerdo.
26/08/2021	Solicitud de cita para terminación anormal del proceso, presentada al juzgado por el ejecutante Jorge Mario Montaña Zuleta.
28/09/2021	Auto niega solicitud de terminación al no estar firmada por todos los ejecutantes:

	<p>JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Bello, Septiembre veintiocho del dos mil veintiuno</p> <p>Se deniega la petición del ejecutante JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA y del ejecutado NELSON AUGUSTO VELASQUEZ, en la cual solicitan desistimiento de la totalidad de las pretensiones de la demanda por mutuo acuerdo y por ende el levantamiento de las medidas cautelares, toda vez que los ejecutantes son JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA, cc 3348890, MARIA EDILMA ZULETA DUQUE, cc 21733306, JORGE IVAN MONTAÑO VELASQUEZ, cc 1128384944, VANESSA MONTAÑO VELASQUEZ, cc 1128396595, y JULIAN STIVEN MONTAÑO LONDOÑO, cc 1128387907, pero solo está firmando uno de los ejecutantes.</p> <p>Por lo tanto, la transacción deberá estar firmada por todos y cada uno de los ejecutantes.</p>
26/10/2021	<p>Solicitud de terminación anormal del proceso por desistimiento y acuerdo entre las partes firmado por:</p> <p>Jorge Mario Montaña Zuleta</p> <p>Jorge Iván Montaña Velásquez</p> <p>Vanesa Montaña Velásquez</p> <p>Julián Stiven Montaña Londoño</p> <p>Nelson Velásquez Gómez</p> <p>No firma María Edilma Zuleta Duque (fallecida 19/03/2021)</p>
21/11/2021	<p>Auto requiere para que se aclare si lo solicitado es la terminación por pago total de la obligación:</p> <p>JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO Bello, Noviembre diecinueve del dos mil veintiuno</p> <p>Mediante petición del 26 de octubre de 2021, solicitan los ejecutantes JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA, VANESSA MONTAÑO VELASQUEZ, JULIAN MONTAÑO LONDOÑO, JORGE IVAN MONTAÑO ZULETA y el ejecutado NELSON AUGUSTO VELASQUEZ, terminación anormal del proceso por desistimiento y acuerdo entre las partes y por ende el levantamiento de las medidas cautelares.</p> <p>Por lo tanto, a efecto de evitar posibles nulidades y no afectar los intereses de la parte activa, se requiere a la parte actora, a efecto de que informen si están solicitando la terminación por pago total de la obligación de conformidad con el art. 461 del Código General del Proceso.</p>
26/04/2022	<p>Nueva solicitud de terminación anormal del proceso por desistimiento y acuerdo entre las partes firmado por:</p> <p>Jorge Mario Montaña Zuleta</p> <p>Jorge Iván Montaña Velásquez</p> <p>Vanesa Montaña Velásquez</p> <p>Julián Stiven Montaña Londoño</p> <p>Nelson Velásquez Gómez</p>

	<p>No firma María Edilma Zuleta Duque (fallecida 19/03/2021)</p> <p>En la solicitud se indica:</p> <p>Nosotros; JORGE MARIO MONTAÑO ZULETA, MARIA EDILMA ZULETA DUQUE ya fallecida (adjunto certificado de defunción), JORGE IVÁN MONTAÑO VELÁSQUEZ, VANESSA MONTAÑO VELÁSQUEZ, JULIÁN MONTAÑO LONDOÑO en adelante Demandantes y NELSON AUGUSTO VELÁSQUEZ GÓMEZ como Demandado, Identificado con cedula No 15.505.050, con domicilio en la carrera 43 No. 51-45 de Copacabana; respectivamente, identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas, actuando a nombre propio, sin presiones ni coacción con ánimo conciliatorio y todo respeto, manifestamos a usted que en ejercicio del derecho consagrado en el código laboral y el código de procedimiento civil, hemos acordado Solicitar la terminación anormal del proceso en referencia, por acuerdo entre las partes, el cual consiste en la totalidad de las pretensiones ordenadas en el mandamiento de pago del proceso en contra del Demandado.</p> <hr/> <p>De mutuo acuerdo, y con la voluntad de las partes hemos llegado al arreglo donde el demandante recibirá la suma de Veinte Millones de Pesos (\$20.000.000), por parte del demandando Nelson Augusto Velásquez. El dinero será pagado en su totalidad por la transferencia electrónica del demandado a la cuenta que indique el demandante una vez el juez profiera la sentencia absolutoria del demandado, de la totalidad de las pretensiones del demandante en el proceso.</p> <p>En ese sentido, se solicita al Juez, al encontrarnos en virtualidad, la terminación anticipada del proceso, mediante auto que acepte el desistimiento y profiera sentencia absolutoria del demandado en el proceso, cuya firmeza produzca efectos de cosa juzgada, según las voces del inciso 20 del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil aplicable en materia laboral por analogía.</p> <p>En consecuencia, señor Juez, y sin lugar a costas solicito se retiren las medidas cautelares que pesan sobre el DEMANDADO. Como el embargo de cuentas en bancos y el embargo del salario ante el municipio de Copacabana.</p> <p>Solicitamos faga lugar.</p>
9/05/2022	Auto ordena terminar el proceso por pago total de la obligación, ordena archivo y levantar medidas cautelares.

- Según lo anterior se evidencia que en el proceso ordinario los demandantes fueron:
 - i) Jorge Mario Montaña Zuleta
 - ii) María Edilma Zuleta Duque (fallecida 19/03/2021)
 - iii) Jorge Iván Montaña Velásquez
 - iv) Vanesa Montaña Velásquez
 - v) Julián Stiven Montaña Londoño
- Jorge Mario Montaña Zuleta fue el único que otorgó poder para el ejecutivo, y se presentó la demanda solicitando se libre mandamiento en su favor.

- Se libró mandamiento de pago en favor de los 5 demandantes del proceso ordinario.
- Si bien el señor Jorge Mario Montaña Zuleta solicita se revoque poder al Dr. José Rene Velásquez Molina, fue requerido para que aporte paz y salvo para aceptar la revocatoria, lo cual no cumplió, y en consecuencia no existe auto aceptando dicha revocatoria.
- Así mismo, no existe escrito de revocatoria de poder por parte de los restantes demandantes frente a las cuales se libró mandamiento de pago, cuyo poder se hallaba vigente conforme a las disposiciones del artículo 77 del código general del proceso (aplicable al procedimiento laboral por disposición del artículo 145 del CPTYSS), sin que sea dable entenderla del documento suscrito por todos para la terminación anormal del proceso, como lo pretende el recurrente. Tampoco obra poder concedido a un nuevo abogado.
- Del artículo 76 del CGP se entiende que, para dar trámite al incidente de regulación de honorarios, previamente debe existir el auto que admite la revocación, y es dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia que el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios.

Se hace importante referir, que la revocatoria tacita se produce únicamente cuando los poderdantes otorgan poder a otro profesional del derecho diferente al que los viene representando, y ello no ocurrió en el presente trámite, toda vez, que por un lado el *a quo* no admitió la revocatoria presentada por el señor MONTAÑO ZULETA, y por el otro, en razón a que al solicitar la terminación del proceso por ejecutivo por *acuerdo entre las partes* obedeció a las facultades dispositivas del litigio que la ley le otorga a las partes, sin que pueda de allí desprenderse una revocatoria tácita del mandato conferido.

Bajo el contexto anterior no se configuran los presupuestos facticos previstos en la ley, para que se pueda dar la regulación de honorarios como tramite incidental, pues ciertamente, como lo consideró el Juez de primera instancia, la norma exige para el inicio del incidente de regulación de honorarios la terminación del poder que vinculaba a los contratantes como apoderado y representado.

Considera la Sala que para que el poder, previamente otorgado para actuar dentro del proceso como abogado, sea revocado, se hace necesario una manifestación expresa de todos los poderdantes en tal sentido o la constitución de uno nuevo, con lo cual se entendería que el anterior ha sido revocado, sin que en el presente caso se esté en ninguno de los dos supuestos.

Es de resaltar la sentencia C-1178 de 2001, en la que se estableció como uno de los problemas jurídicos “determinarse si el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil quebranta el derecho a la igualdad del profesional del derecho que renuncia del poder, debido a que no puede recurrir al trámite incidental para la regulación de sus honorarios, como si puede hacerlo el abogado que finaliza su labor ante la revocatoria del mismo.”, asunto que no es ajeno a lo discutido en el presente proceso, donde la Corte Constitucional expresó:

Así las cosas, el abogado que concluye su labor en juicio a causa de la revocatoria del poder , sin perjuicio de los derechos derivados del eventual contrato de gestión, puede solicitarle al juez de la causa que liquide sus honorarios teniendo en cuenta, simplemente, la labor realizada, en tanto el abogado que renuncia, estando el proceso para el que fue designado en curso, debe acudir a un trámite que le permita, no solo obtener el pago de sus honorarios, sino dejar en claro su lealtad, responsabilidad y probidad profesional.

Y, al parecer de la Corte, la antedicha demostración no puede darse dentro de un trámite, establecido por el Estatuto Procesal Civil para

adelantar cuestiones incidentales, porque la renuncia del poder, estando en curso el proceso, es un asunto que, debido a su trascendencia, requiere de las oportunidades que otorgan los procesos en donde hay plena confrontación.”

Del anterior precedente queda claro que, habiendo revocatoria del poder el abogado puede pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente, pero la existencia de solicitud de terminación del proceso por acuerdo entre las partes, impone que el profesional del derecho que vea defraudados sus intereses deba acudir a otro trámite con las debidas oportunidades procesales, como lo sería el proceso ordinario laboral

Frente a este asunto, en pronunciamiento AP5565-2015 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, aludiendo a la sentencia C-1178 de 2001, indicó:

“Así las cosas, el abogado que concluye su labor en juicio a causa de la revocatoria del poder, sin perjuicio de los derechos derivados del eventual contrato de gestión, puede solicitarle al juez de la causa que liquide sus honorarios teniendo en cuenta, simplemente, la labor realizada, en tanto el abogado que renuncia, estando el proceso para el que fue designado en curso, debe acudir a un trámite que le permita, no solo obtener el pago de sus honorarios, sino dejar en claro su lealtad, responsabilidad y probidad profesional.

Y, al parecer de la Corte, la antedicha demostración no puede darse dentro de un trámite, establecido por el Estatuto Procesal Civil para adelantar cuestiones incidentales, porque la renuncia del poder, estando en curso el proceso, es un asunto que, debido a su trascendencia, requiere de las oportunidades que otorgan los procesos en donde hay plena confrontación. ”

Así las cosas, en este evento el abogado debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, competente para definir la solicitud elevada, según dispone el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, modificado por el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001”

Así las cosas, al no haberse revocado el poder al Dr. José Rene Velásquez Molina por todos sus poderdantes, este continua vigente, no siendo posible

dar trámite al incidente de regulación de honorarios de la forma como se plantea. Lo anterior sin perjuicio de que pueda emprender otras acciones judiciales, como sería la señalada en el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001, relativa a la posibilidad de ejercer ante los jueces laborales, mediante un proceso ordinario, la acción de reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive, con lo que el incidentista no se quedaría sin la posibilidad de recuperar el fruto de su trabajo.

Conforme a las consideraciones anteriores, se CONFIRMARÁ la decisión recurrida.

Sin costas en esta instancia

En mérito de lo expuesto, la **Sala primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 21 de junio de 2022, revisada en virtud del recurso de apelación presentado por el Dr. José Rene Velásquez Molina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**
Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 213 de noviembre 25 de 2022
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>